

ROL PROCESO	Liderazgo estratégico y enfoque hacia la prevención Evaluación Independiente		
NOMRE PROFESIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO	CAMILO OLIVELLA VALENCIA	FECHA	12/05/2026
CARGO O CONTRATO	CONTRATO 780-2026		
TIPO DE ACCIÓN	PARTICIPANTES	TEMA Y DESCRIPCION DE LA ASESORIA O ACOMPANAMIENTO	
ACOMPANAMIENTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN (13-05-2025)	<p>PERMANENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Delegada Secretario Distrital de Gobierno ✓ Subsecretaría de Gestión Institucional ✓ Directora Jurídica ✓ Subsecretario de Gestión Local ✓ Directora Gestión de Talento Humano <p>INVITADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jefe Oficina Control Interno ✓ Delegada Secretaría Jurídica Distrital ✓ Secretaria Técnica del comité ✓ Apoderado(s) Secretaría Jurídica Distrital 	<p>Teniendo en cuenta la información registrada en las Fichas SIPROJ No. 1842,1843, 1844, 1845.</p> <p>Se realiza su revisión y análisis así:</p> <p>FICHA TECNICA DE CONCILIACIÓN: 1842</p> <p>Responsable de la ficha: KRISTIAN CAMILO SALAS DUEÑAS Numero de proceso: E- 2024-00221 Tipo de proceso: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO Demandante: ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A</p> <p>Demandado: SECRETARÍA DE GOBIERNO</p> <p>Despacho: JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ</p> <p>PROBLEMA JURIDICO:</p> <p>¿Adolece de alguna causal de nulidad la Resolución No? 1370 del 09 de diciembre de 2021, emitida por la Secretaría de Gobierno, que conlleve a un posterior restablecimiento del Derecho?</p> <p>PRETENSIONES DE LA DEMANDA:</p> <p>Que se declare la nulidad de la Resolución No.1370 del 9 de diciembre de 2021 mediante la cual se declaró que ALIANSALUD adeudaba a Bogotá D.C. la suma de \$9.282.465 más intereses de mora de que trata el artículo 4 del Decreto Ley 1281 de 2002, desde el 19 de noviembre de 2021 con ocasión del pago de las incapacidades de la SECRETARIA a favor de sus servidores vinculados y ordenó a ALIANSALUD el reembolso de los dineros pagados por tal concepto.</p> <p>DESCRIPCIÓN CLARA DE LOS PERJUICIOS:</p>	

		<p>ALIANSA SALUD solicita que se declare la nulidad de la Resolución No. 1370 del 9 de diciembre de 2021 y, como restablecimiento del derecho, que se determine que no está obligada a reintegrar a la Secretaría las sumas objeto de reembolso; subsidiariamente, pide que, en caso de haber efectuado el pago, se ordene la devolución de los valores cancelados. Asimismo, solicita el reconocimiento de perjuicios sobre dichas sumas, consistentes en el pago de intereses moratorios a la tasa máxima legal, o en subsidio, la actualización por IPC junto con intereses legales del 6%, o únicamente la actualización por IPC.</p> <p>RELACIÓN CLARA DE LOS HECHOS:</p> <p>La Secretaría reportó incapacidades de varios funcionarios correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2021, frente a las cuales Aliansalud efectuó reembolsos parciales debido a diferencias en la liquidación del IBC. Debido a ello, el 29 de octubre de 2021 la Secretaría solicitó el reintegro de \$9.282.465 por concepto de incapacidades de origen común pagadas a sus servidores; sin embargo, Aliansalud negó el reconocimiento de dichas sumas alegando la prescripción de las reclamaciones conforme al artículo 28 de la Ley 1438 de 2011. Posteriormente, mediante la Resolución No. 1370 del 9 de diciembre de 2021, se declaró que Aliansalud adeudaba a la Secretaría la suma reclamada junto con intereses moratorios, decisión que quedó ejecutoriada el 6 de enero de 2022.</p> <p>ANÁLISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR:</p> <p>El Comité de Conciliación tiene la función de determinar, en cada caso concreto, la procedencia o improcedencia de la conciliación y fijar la posición institucional de la entidad, conforme a las normas vigentes y la jurisprudencia aplicable. La Ley 2220 de 2022 establece que son conciliables los asuntos que puedan ser conocidos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley, entre ellas, aquellos casos en los que no se hayan agotado los recursos administrativos o exista caducidad de la acción. Asimismo, el CPACA prevé la posibilidad de promover fórmulas de arreglo en cualquier etapa del proceso judicial. En el caso analizado, aunque la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho es, en principio, conciliable, se concluye que no existen condiciones jurídicas materiales que permitan sustentar la procedencia de una fórmula de arreglo directo.</p> <p>CADUCIDAD DE LA ACCIÓN:</p> <p>Dado que el medio de control al que se acude es el de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, y teniendo en cuenta que la notificación de la Resolución No. 1370 de 2021 se realizó el 22 de diciembre de 2021,</p>
--	--	--

		<p>seguidamente, la solicitud de conciliación fue radicada el día 18 de abril de 2022, y esta se declaró fracasada el 27 de mayo de 2022, mismo día en el que se interpuso la demanda ante la jurisdicción, se encuentra que, a la fecha, no ha operado el fenómeno de la caducidad.</p> <p>PONDERACIÓN DE LA SITUACIÓN PROCESAL:</p> <p>La entidad contestó oportunamente la demanda proponiendo las excepciones de inexistencia de causal de nulidad, plena validez de la Resolución No. 1370 de 2021 y presunción de legalidad del acto administrativo. Señaló que la parte demandante no logró demostrar los supuestos vicios de falsa motivación y falta de competencia alegados, pues la reclamación del reembolso se presentó dentro del término de prescripción previsto en el artículo 28 de la Ley 1438 de 2011, y el incumplimiento o pago incompleto por parte de la EPS únicamente genera intereses moratorios y no la pérdida del derecho reclamado. Asimismo, indicó que Aliansalud realizó una indebida liquidación del IBC al aplicar reglas propias de salarios variables de trabajadores particulares a funcionarios públicos sujetos a un régimen especial. Finalmente, sostuvo que el Secretario de Gobierno sí contaba con competencia para expedir el acto administrativo, razón por la cual concluyó que la Resolución No. 1370 de 2021 se ajusta a derecho y no existe viabilidad jurídica para conciliar.</p> <p>RECOMENDACIÓN:</p> <p>Frente a la postura de no conciliar ni proponer formula conciliatoria, no se presenta ninguna observación.</p> <p>FICHA TECNICA DE CONCILIACIÓN: 1843</p> <p>Responsable de la ficha: CAMILO ANDRES ESPITIA SANDOVAL Numero de proceso: E- 2024-00401 Tipo de proceso: EJECUTIVO CONTENCIOSO Demandante: CONSORCIO CEYCO-BAC SECRETARÍA DE GOBIERNO JAL-SANTAFÉ</p> <p>Demandado: SECRETARÍA DE GOBIERNO (SOLO REPRESENTA)</p> <p>Despacho: JUZGADO 35 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD SECCION TERCERA DE BOGOTÁ</p> <p>PROBLEMA JURIDICO:</p>
--	--	---

		<p>¿Concurren en la factura N° CB 10 expedida por el CONSORCIO CEYCO-BAC los elementos para la ejecución del título ejecutivo en contra de la Alcaldía Local de Santa Fe – Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe?</p> <p>PRETENSIONES DE LA DEMANDA:</p> <p>Se pretende el pago de la suma de \$74.999.001 correspondientes a la factura de venta CB 10, presentada el 4 de junio de 2024 ante la Alcaldía Local de Santa Fe, así como el reconocimiento de intereses moratorios desde la fecha de exigibilidad del título valor y una indemnización de perjuicios por valor de \$4.964.000.</p> <p>DESCRIPCIÓN CLARA DE LOS PERJUICIOS:</p> <p>Se estima en SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL UN PESOS (\$79.963.001.00)</p> <p>RELACIÓN CLARA DE LOS HECHOS:</p> <p>Como hechos relevantes del caso, se tiene que el 9 de marzo de 2019 el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe suscribió con el Consorcio CEYCO BAC el contrato de consultoría FDLSF-CIN-045-2019, cuyo objeto consistía en la actualización, complementación y ajustes de estudios y diseños para la intervención del Salón Comunal del barrio Las Cruces, así como la obtención de la licencia de construcción. El contrato inició el 20 de marzo de 2019, finalizó el 25 de febrero de 2022 y fue liquidado de mutuo acuerdo el 24 de mayo de 2024. En el acta de liquidación, el Fondo precisó que el análisis técnico se basó en la documentación encontrada en SECOP II y aclaró que no asumía responsabilidad por posibles omisiones o actuaciones indebidas ocurridas durante la ejecución contractual. Posteriormente, el 4 de junio de 2024, el Consorcio presentó la factura electrónica CB 10 por valor de \$74.999.001; sin embargo, el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe requirió aclaraciones y reportó posibles incumplimientos parciales y nuevos hallazgos relacionados con el objeto contratado mediante comunicaciones posteriores dirigidas al contratista.</p> <p>ANÁLISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR:</p> <p>La Ley 2220 de 2022 define la conciliación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos orientado a facilitar el acceso a la justicia, promover el diálogo y proteger el patrimonio público y el interés general en materia contencioso administrativa. En este marco, corresponde al Comité de Conciliación determinar la procedencia o improcedencia de la conciliación y fijar la posición institucional de la entidad, con fundamento en la normatividad y la jurisprudencia aplicable.</p>
--	--	---

	<p>La ley establece que son conciliables los asuntos que puedan ser conocidos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, salvo las excepciones expresamente señaladas, mientras que el Código General del Proceso dispone que el juez debe promover fórmulas de arreglo en la audiencia inicial y fijar el litigio conforme a los hechos probados y discutidos. En consecuencia, tanto el Comité de Conciliación como los apoderados de la entidad deben analizar cada caso concreto y adoptar la estrategia de defensa judicial o fórmula conciliatoria más adecuada conforme a los parámetros legales vigentes.</p> <p>CADUCIDAD DE LA ACCIÓN:</p> <p>Analizados los hechos presentados por el demandante, se puede establecer que, desde la presentación del título (04-06-2024) hasta la presentación de la demanda no transcurrieron más de los cinco (5) años de los que trata el literal K del artículo 164 del CPACA, por lo que no ha operado el fenómeno de la caducidad.</p> <p>PONDERACIÓN DE LA SITUACIÓN PROCESAL:</p> <p>La entidad sostuvo que la factura electrónica CB-10 no constituye un título ejecutivo exigible, debido a que el acta de liquidación del contrato FDLSF-CIN-045-2019 contenía salvedades relacionadas con posibles omisiones e incumplimientos del contratista CEYCO BAC, lo que impedía afirmar de manera clara y definitiva el paz y salvo contractual. Señaló que, con posterioridad a la liquidación, se identificaron inconsistencias técnicas y presupuestales relacionadas con los estudios y diseños entregados, situación que motivó nuevos requerimientos por parte del Fondo de Desarrollo Local y de la interventoría. En consecuencia, argumentó que existía un incumplimiento contractual que afectaba la exigibilidad del pago reclamado y que, por tratarse de una controversia sobre el cumplimiento del contrato estatal, el mecanismo judicial adecuado no era el proceso ejecutivo sino el medio de control de controversias contractuales previsto en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011.</p> <p>OBSERVACIONES ADICIONALES:</p> <p>La entidad fundamentó su posición en las disposiciones del Código Civil y del Código General del Proceso relativas a la mora, los intereses y los requisitos del título ejecutivo, señalando que para acudir a un proceso ejecutivo la obligación debe ser clara, expresa y exigible. En ese sentido, sostuvo que la factura CB-10 no cumple con tales requisitos, debido a las controversias existentes sobre el cumplimiento del contrato y las salvedades consignadas en el acta de liquidación. Asimismo, indicó que la discusión sobre la exigibilidad del pago y el eventual incumplimiento contractual debe ventilarse mediante el medio de control de controversias</p>
--	--

		<p>contractuales y no a través de un proceso ejecutivo, razón por la cual considera improcedente la ejecución pretendida.</p> <p>RECOMENDACIÓN: Frente a la postura de no conciliar ni proponer formula conciliatoria, no se presenta ninguna observación.</p> <p>FICHA TECNICA DE CONCILIACIÓN: 1844</p> <p>Responsable de la ficha: KRISTIAN CAMILO SALAS DUEÑAS Numero de proceso: E- 2020-00111 Tipo de proceso: REPARACIÓN DIRECTA Demandante: CONSTRUCCIONES AJB SAS PARRA SERRANO JOSEFINA</p> <p>Demandado: 1. SECRETARÍA DE GOBIERNO (SOLO REPRESENTA) 2. SECRETARÍA DE GOBIERNO ALC.LOCAL-BOSA</p> <p>Despacho: JUZGADO 35 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD SECCION TERCERA DE BOGOTÁ</p> <p>PROBLEMA JURIDICO: ¿Existe responsabilidad de Bogotá – Secretaría de Gobierno – Alcaldía Local de Bosa, por los presuntos daños y perjuicios ocasionados a la empresa Construcción AJB S.A.S., con ocasión a las labores supuestamente prestadas en favor del Distrito?</p> <p>PRETENSIONES DE LA DEMANDA: Se solicita que, mediante sentencia con efectos de cosa juzgada y conforme al CPACA y el artículo 90 de la Constitución, se declare la responsabilidad solidaria del Distrito Capital y la Alcaldía Local de Bosa por los daños y perjuicios presentes y futuros causados a CONSTRUCCIONES AJB S.A.S., derivados de presuntas fallas en el servicio por falta de control y vigilancia en la ejecución del contrato 021-2015 celebrado con el Consorcio Integral Bosa, cuyo objeto era la intervención de la malla vial local e intermedia. Se alega que dicha omisión permitió el manejo inadecuado de recursos públicos, incluyendo el no pago de obligaciones a terceros.</p> <p>DESCRIPCIÓN CLARA DE LOS PERJUICIOS: Se solicita que, como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, se condene a la Alcaldía Local de Bosa – Fondo de Desarrollo Local de Bosa y a la Alcaldía Mayor de Bogotá a pagar a CONSTRUCCIONES</p>
--	--	--

		<p>AJB S.A.S. los perjuicios materiales y morales, tanto actuales como futuros, en cuantía estimada inicialmente en \$101.418.608, por concepto de la reparación del daño presuntamente ocasionado.</p> <p>RELACIÓN CLARA DE LOS HECHOS:</p> <p>Se expone que la Alcaldía Local de Bosa suscribió con el Consorcio Integral Bosa el contrato de obra No. 021-2015, cuyo objeto consistía en la intervención de la malla vial local e intermedia bajo el sistema de precios unitarios. El demandante afirma haber sido vinculado de forma verbal por el representante del consorcio para suministrar mano de obra a través de su empresa CONSTRUCCIONES AJB S.A.S., desde el 15 de julio de 2015, empleando en promedio 12 trabajadores para la ejecución de actividades propias del contrato. Señala que, una vez finalizado el contrato, el consorcio no canceló las sumas adeudadas por las labores ejecutadas, ni la Alcaldía Local de Bosa efectuó pago alguno, motivo por el cual se promueve la presente acción judicial.</p> <p>ANÁLISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR:</p> <p>El Comité de Conciliación tiene la función de determinar en cada caso la procedencia o improcedencia de la conciliación y de fijar la posición institucional conforme a la normatividad vigente, analizando la jurisprudencia y las sentencias de unificación del Consejo de Estado, así como la eventual procedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición. De acuerdo con la Ley 2220 de 2022, son conciliables los conflictos que conozca la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, salvo aquellos expresamente prohibidos, mientras que el artículo 90 establece las excepciones, y el artículo 180 del CPACA permite promover fórmulas de arreglo en audiencia judicial. En el caso concreto, al tratarse de una demanda de reparación directa, el asunto es en principio conciliable; sin embargo, se concluye que no existen condiciones jurídicas materiales que hagan viable una fórmula de arreglo directo.</p> <p>CADUCIDAD DE LA ACCIÓN:</p> <p>En consecuencia, dado que el medio de control al que se acude es el de Reparación Directa y teniendo en cuenta que con la liquidación del contrato la parte tuvo conocimiento del saldo final de deudas (24 de mayo de 2018), tenía hasta el 25 de mayo de 2020 para presentar la demanda, no obstante, la caducidad estuvo suspendida desde el 18 de agosto de 2018 al 11 de enero de 2019, cuando se declaró fallida la conciliación extrajudicial, por lo tanto, al momento de radicar la demanda (04 de agosto de 2020), no había operado el fenómeno de la caducidad.</p> <p>PONDERACIÓN DE LA SITUACIÓN PROCESAL:</p>
--	--	---

		<p>Se expone que la responsabilidad extracontractual del Estado, conforme al artículo 90 de la Constitución y la jurisprudencia del Consejo de Estado, se configura cuando existe un daño antijurídico imputable a la administración, derivado de una falla del servicio y con relación de causalidad demostrada. Sin embargo, en el caso concreto se concluye que no se cumplen dichos requisitos, pues no se acredita la imputación del daño a la Alcaldía Local de Bosa ni la existencia de un nexo causal directo. Asimismo, se indica que el supuesto vínculo contractual alegado fue de carácter verbal entre el demandante y el Consorcio Integral Bosa, sin que la Alcaldía fuera parte del mismo ni surgiera un contrato estatal válido con la administración, al no cumplirse la solemnidad escrita exigida por la Ley 80 de 1993. En relación con el enriquecimiento sin causa, se señala que tampoco procede, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, salvo excepciones estrictas que no se configuran en este caso, al no existir coacción, urgencia manifiesta ni actuación directa de la entidad pública que obligara la prestación del servicio. En consecuencia, se concluye que no hay responsabilidad administrativa atribuible a la Alcaldía Local de Bosa por los perjuicios alegados.</p> <p>RECOMENDACIÓN:</p> <p>Frente a la postura de no conciliar ni proponer formula conciliatoria, no se presenta ninguna observación.</p> <p>FICHA TECNICA DE CONCILIACIÓN: 1845</p> <p>Responsable de la ficha: VICKY ALEXANDRA FERNANDEZ ARANA</p> <p>Numero de proceso: E- 2026-155585</p> <p>Tipo de proceso: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL</p> <p>Demandante: 4 CUARTOS S.A.S</p> <p>Demandado: ALCALDIA LOCAL DE BOSA</p> <p>Despacho: PROCURADURÍA 137 - DELEGADA PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>PROBLEMA JURIDICO:</p> <p>¿Determinar si, habiéndose efectuado el pago de las sumas reclamadas por 4 CUARTOS S.A.S., persiste materia conciliable dentro del presente trámite extrajudicial?</p> <p>PRETENSIONES DE LA DEMANDA:</p>
--	--	---

		<p>Se solicita que el Fondo de Desarrollo Local de Bosa reconozca y pague a favor de 4 CUARTOS S.A.S. la suma de \$13.700.000 correspondiente al saldo pendiente de la factura electrónica FV-A-6831 derivada del contrato CPS-820-2025, junto con el pago inmediato de los valores adeudados por conceptos asociados como refrigerios y estación de café, así como los intereses moratorios desde la exigibilidad de la obligación hasta su pago total. Se precisa que la obligación proviene de un contrato estatal ejecutado y aprobado sin objeciones por la supervisión, configurándose como clara, expresa y exigible. Como fórmula conciliatoria, la parte propone el pago del capital adeudado por \$13.700.000 más \$1.350.000 por intereses moratorios, con la condonación del 100% de estos últimos si el pago del capital se realiza dentro de los 20 días siguientes a la aprobación del acuerdo conciliatorio, advirtiendo que, de no cumplirse el plazo, se reactivaría la totalidad de la obligación incluyendo intereses.</p> <p>DESCRIPCIÓN CLARA DE LOS PERJUICIOS:</p> <p>Las pretensiones se estiman en un total de \$15.050.000 M/CTE, discriminados en un capital adeudado de \$13.700.000 correspondiente al saldo de la factura FV-A-6831 derivada del contrato CPS-820-2025, y \$1.350.000 por concepto de intereses moratorios, liquidados de manera conservadora a una tasa del 27% E.A. conforme al artículo 4 numeral 8 de la Ley 80 de 1993, causados desde el 6 de noviembre de 2025 hasta el 20 de marzo de 2026.</p> <p>RELACIÓN CLARA DE LOS HECHOS:</p> <p>El Fondo de Desarrollo Local de Bosa suscribió con 4 CUARTOS S.A.S. el contrato CPS-820-2025 para la realización del Festival Artes Mayores 2025, el cual fue ejecutado en su totalidad por el contratista. En el trámite de pago, la factura electrónica No. A-6831 fue revisada y aprobada por la supervisión el 6 de octubre de 2025 sin observaciones sobre la ejecución contractual. Posteriormente surgió una diferencia respecto del tratamiento tributario aplicable a los ítems de refrigerios y estación de café, frente a lo cual la contratista sostuvo la procedencia del Impuesto Nacional al Consumo (INC) y no del IVA solicitado por la entidad. A pesar de las gestiones de cobro mediante derechos de petición y comunicaciones posteriores, el Fondo realizó un pago parcial el 2 de diciembre de 2025, quedando un saldo pendiente de \$13.700.000, el cual, pese a reiteraciones del contratista, no ha sido cancelado a la fecha de la solicitud de conciliación, aunque el contrato se encuentra ejecutado y la cuenta aprobada.</p> <p>ANÁLISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR:</p>
--	--	---

		<p>El Comité de Conciliación tiene la función de definir, conforme a la normatividad vigente, la procedencia o improcedencia de la conciliación y fijar la posición institucional en cada caso, así como determinar el llamamiento en garantía con fines de repetición, atendiendo la jurisprudencia y los criterios unificados del Consejo de Estado. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 2220 de 2022, son conciliables los asuntos susceptibles de transacción, especialmente las controversias contractuales derivadas de la ejecución, interpretación o liquidación de contratos estatales. En este contexto, y en cumplimiento del auto que fijó audiencia de conciliación para el 13 de mayo de 2026, se somete a consideración del Comité la presente ficha para definir la viabilidad de conciliar el conflicto.</p> <p>CADUCIDAD DE LA ACCIÓN:</p> <p>En el presente caso, el Contrato de mínima cuantía No. 820 de 2025 finalizó su ejecución el 25 de septiembre de 2025, y el mismo fue liquidado mediante acta suscrita el 1 de octubre de 2025. En consecuencia, el término de caducidad debe analizarse a partir de la liquidación del contrato, por lo tanto, se concluye que la acción de controversias contractuales no se encuentra caducada, por lo que el asunto es susceptible de ser objeto de conciliación.</p> <p>RECOMENDACIÓN:</p> <p>Frente a la postura de no conciliar ni proponer formula conciliatoria, no se presenta ninguna observación.</p> <p>Análisis de la Formalización de la Metodología de Costo-Beneficio</p> <p>En atención a la recomendación realizada por la Oficina de Control Interno en el marco del Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Acciones de Repetición de la Secretaría Distrital de Gobierno – Semestre II 2025, referenciada a continuación:</p> <p>“Se recomienda formalizar y aprobar mediante acuerdo del Comité los criterios o metodología de costo-beneficio utilizados en la evaluación de los asuntos susceptibles de conciliación, con el fin de estandarizar dicho análisis y garantizar la uniformidad en la toma de decisiones.”</p> <p>Dicha recomendación se encuentra relacionada con la verificación realizada al cumplimiento del Acuerdo 002 de 2025 de la SDG, mediante el cual se adopta el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la</p>
--	--	--

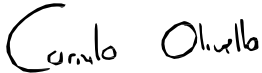

		<p>Secretaría Distrital de Gobierno, específicamente frente a lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 4 Funciones de Comité de Conciliación, así:</p> <p>“Aprobar metodologías o criterios de costo beneficio diseñadas por la Dirección Jurídica, para evaluar los asuntos susceptibles de conciliación, de acuerdo, de terminación anticipada de procesos, o del inicio de acciones de recuperación de recursos públicos, para lo cual tendrán en cuenta el precedente judicial por supuestos fácticos análogos, estudios de litigiosidad, e impacto económico de la defensa judicial, entre otros instrumentos, y la constitución como víctima en el proceso penal para la recuperación del patrimonio público.”</p> <p>El Equipo auditor evidenció la elaboración del proyecto de “ACUERDO No. ____ DE 2026”, “Por medio del cual se aprueba la Metodología para Análisis de Costo-Beneficio para la protección y recuperación del Patrimonio Público de la Secretaría Distrital de Gobierno”, así como su respectivo anexo metodológico.</p> <p>Se observa que los documentos desarrollan los lineamientos previstos en el artículo 164 y el artículo 215 del Decreto Distrital 479 de 2024, así como las disposiciones contenidas en la Ley 2220 de 2022 y la Directiva 022 de 2023 expedida por la Secretaría Jurídica Distrital, incorporando criterios relacionados con: i) cuantía del daño y gastos del proceso, ii) connotación pública o social, iii) existencia de pruebas o documentos, iv) honorarios de abogado y perito, v) hechos de corrupción y vi) complejidad del problema jurídico.</p> <p>Asimismo, el anexo metodológico desarrolla de manera detallada cada uno de los criterios de análisis, incluyendo fundamentos normativos, jurisprudenciales y fórmulas orientadoras para el estudio de viabilidad económica y jurídica de los asuntos sometidos a consideración del Comité de Conciliación.</p> <p>En consecuencia, se considera que la entidad estaría atendiendo materialmente la recomendación formulada, en tanto formalizó y estructuró una metodología de costo-beneficio mediante acto administrativo del Comité de Conciliación, estableciendo criterios orientadores para el análisis de los asuntos susceptibles de conciliación y recuperación del patrimonio público. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que la metodología conserva un enfoque principalmente cualitativo y orientador, sin contemplar expresamente una ponderación específica o valoración diferenciada entre los criterios definidos, aspecto</p>
--	--	--

		que podría complementar el ejercicio de uniformidad en futuros análisis y decisiones del Comité.
--	--	--

EVIDENCIAS

Fichas SIPROJ No. 1842, 1843, 1844, 1845, Proyecto de acuerdo y anexo sobre la Metodología para Análisis de Costo-Beneficio

COMPROMISOS

ELABORÓ	PARTICIPANTE (Si aplica)
<p>CAMILO ANDRES OLIVELLA VALENCIA OCI</p>  <p>REVISÓ</p>  <p>LADY JOHANNA MEDINA MURILLO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Nombre</p> <p>Cargo</p> <p>*Aplica para asesorías y acompañamientos presenciales</p>



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ACOMPANAMIENTO Y ASESORIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

--	--

